

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARIA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO
DEMANDADO	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-014-2022-00002-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CAUSACIÓN, PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA.
DECISIÓN	REVOCA y CONCEDE

Medellín, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARIA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 020**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la demandante MARIA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, contra la sentencia que profirió el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 31 de enero de 2023.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora MARIA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, contrajo matrimonio con el señor MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO en el mes de noviembre de 1970.

Refiere el introductorio que, en vigencia del vínculo matrimonial, se procrearon cinco hijos de nombres: SANDRA MANUELA, CARLOS ALBERTO, MAURICIO ANTONIO, LUIS FERNANDO y DIANA MERCEDES ARANGO VALENCIA, todos ellos, a la fecha de presentación de la demanda, mayores de 25 años.

Narra la demanda que, la demandante y su cónyuge, convivieron juntos como pareja, compartiendo lecho, techo y mesa, desde la fecha en que se casaron, y hasta el 1 de enero de 2018, fecha en la cual, el señor ARANGO HENAO falleció por causas de origen común.

Agrega la demanda que, el señor MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, se encontraba afiliado al Sistema General de Pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que actualmente administra la entidad accionada y que la afiliación, se hizo desde el 17 de febrero de 1969, cotizando en toda su vida laboral, 672 semanas.

Describe la demanda que, la demandante en condición de cónyuge, reclamó ante COLPENSIONES, el reconocimiento de la prestación a su favor y la entidad, mediante Resolución SUB232151 del 3 de septiembre de 2018, negó el reconocimiento de la prestación, argumentando que el causante no cotizó 50

semanas en los últimos tres años anteriores a su muerte. Ante lo cual, la demandante reclamó la indemnización sustitutiva de sobreviviente, y la entidad demandada, mediante Resolución SUB 327872 del 29 de noviembre de 2019, negó el reconocimiento de dicha prestación, aduciendo que, en vida, el causante había reclamado la indemnización sustitutiva de vejez y que a pesar de que no la había cobrado, la entidad, no podía reconocer la prestación, a menos que se radicara el trámite denominado PAGO A HEREDEROS.

Comenta la demanda que, es cierto que el causante no alcanzó a computar 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a su deceso, no obstante, las 672 semanas que el de cujus cotizó y que se reconocen por COLPENSIONES en la Resolución SUB 327872 del 29 de noviembre de 2019, especialmente **354.85**, fueron semanas cotizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, antes del 1º de abril de 1994, las cuales, conceden el derecho a la actora, para que le sea reconocida y pagada, la prestación económica que reclama, por virtud del principio de la condición más beneficiosa, establecido jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-005 de 2018, que permite la aplicación de los requisitos traídos por el Decreto 758 de 1990.

Indica la demanda que, el fallecido los últimos años de cotización y hasta que la reglamentación legal se lo permitió, cotizó a pensión a través de COLOMBIA MAYOR, como quiera que no le era posible acceder al mercado laboral por su avanzado estado de edad.

Por último, se aduce que la demandante cumple a cabalidad los requisitos jurisprudenciales que establece el TEST de procedencia traído consigo por la providencia de unificación para beneficiarse de la posibilidad que se describe, en tanto: **i)** es una persona de la tercera edad, **ii)** desde que sobrevino la muerte de su cónyuge, se ha visto obligada a padecer de una delicada situación económica que viene afectando de manera notoria su mínimo vital, en cuanto a sus condiciones de vida digna, **iii)** dependía económicamente del causante, pues era éste, quien con los esporádicos e informales jornales que le daban, le suministraba todo lo necesario para su congrua subsistencia pues la demandante, no recibe ningún tipo de ingresos, ni ayudas del estado o de

particulares, **iv)** el cónyuge de la demandante, no pudo completar las semanas debido a que no lograba acceder a un empleo formal, por su avanzada edad, y al cumplir los 65 años de edad, fue retirado del Programa de Colombia Mayor y, **v)** las actuaciones de la demandante, fueron absolutamente diligentes desde el principio, en efectuar todo tipo de reclamaciones, en principio la pensión de sobreviviente y con posterioridad a ello, la reclamación de la indemnización sustitutiva de sobreviviente, ambas prestaciones negadas por COLPENSIONES.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que la señora MARIA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su esposo MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, por haber cotizado más de 300 semanas antes del 1° de abril de 1994.

Que se CONDENE a COLPENSIONES a: **1)** Reconocer y pagar la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su esposo, el señor MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO. **2)** Al reconocimiento de las mesadas retroactivas desde el 1 de enero de 2018, fecha del fallecimiento del causante. **3)** Al pago de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, por el no pago de las mesadas pensionales, o, en subsidio, a la indexación de la condena, y que se condene en costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta oportuna a través de su apoderado judicial, según consta en el archivo PDF N° 09, obrante en el expediente digital, aceptando como ciertos los siguientes hechos: el matrimonio entre la demandante y el causante, y, lo relativo a la reclamación administrativa ante la entidad.

Adujo la entidad que, revisada la historia laboral del afiliado MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, se evidencia que en el lapso comprendido entre el 1967 y 2008, solo alcanzó a cotizar un total de **476 semanas**, al sistema general de pensiones, por lo que, en principio, se deberá desestimar el reconocimiento

de la prestación económica, atendiendo la inobservancia del cumplimiento de los requisitos de la norma vigente al momento de su deceso.

Que no obstante lo anterior, la parte actora solicita la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, amparado en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, aplicando para los efectos, lo previsto en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, en tanto, señala que el señor MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, acredita un total de 476 semanas de cotización antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, al 01 de abril de 1994, sin embargo, tampoco se cumplen las condiciones dispuestas por la jurisprudencia, para acceder a tal reconocimiento económico.

La entidad se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *"INEXISTENCIA DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE EN APLICACIÓN DE LA CONDICION MÁS BENEFICIOSA, IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES MORATORIOS, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN, COMPENSACIÓN, DESCUENTOS DEL RETROACTIVO POR SALUD, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS"*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, el A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 31 de enero de 2023, DECLARÓ probada la excepción de mérito, de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de sobreviviente, invocada por la señora MARÍA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, en virtud de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en calidad de cónyuge supérstite del asegurado fallecido MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, dándole prevalencia a la doctrina legal probable decantada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, como órgano de cierre en esta jurisdicción, frente a la postura enarbolada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 05 de 2018.

Y, en consecuencia, ABSOLVIÓ a COLPENSIONES, de las pretensiones de la demanda, por considerar que no reúne las exigencias del precedente decantado por la Corte Suprema de Justicia.

Como fundamento de su decisión, (minuto 47:45) estimó el juez de primer grado que el afiliado fallecido, no dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios, pues si bien, contaba con un considerable número de semanas cotizadas, estas le fueron insuficientes para causar la pensión, en los términos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige que el afiliado fallecido hubiera cotizado ***cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento***, y que en el caso en concreto, el señor MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, falleció el 1 de enero de 2018, y realizó cotizaciones al sistema de seguridad social, hasta el año 2008.

Y que, no es posible dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, toda vez que el despacho, acoge íntegramente el criterio de la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, que imposibilita el salto normativo y se aparta de la sentencia **SU-005/18**, emitida por la Corte Constitucional, pues estima que la Corte Suprema de Justicia, es el órgano de cierre de esta jurisdicción y que a la postre, los jueces laborales, deben adoptar una posición u otra.

Adujo a su vez el sentenciador que, de acuerdo al trámite administrativo adelantado por Colpensiones, se acreditó que la demandante y el causante convivieron desde su matrimonio en el año 1970 y que dicha cohabitación, se extendió hasta la muerte del causante, procreando cinco hijos en la relación. Que los testigos traídos a instancia de la parte demandante, lograron corroborar tal situación y en especial, que la demandante dependía de la ayuda económica que aportaba su cónyuge en vida, que, en la actualidad, aquella sobrevive de la ayuda que le dan sus hijos, vive en arriendo y no percibe renta o beneficio del estado. Exaltó el juez de instancia que, si bien los testigos tienen un grado de afinidad con la demandante, pues ambos son sus yernos, concluyó que éstos, no tienen interés en las resultas del proceso.

Finalmente expuso el A quo que, si bien no da aplicación a la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, a su juicio, en el caso en concreto, se cumplen las condiciones del TES dispuesto por el alto tribunal, para aplicar el principio de la condición más beneficiosa; por cuanto la demandante, es una

persona de la tercera edad, con analfabetismo, tiene insatisfecha sus necesidades, vive de la ayuda que le dan sus hijos, su cónyuge era quien proveía los gastos del hogar, la actora no ha estado en el sistema de pensiones, y ha solicitado tanto la indemnización sustitutiva, como la pensión de sobreviviente, y ambas reclamaciones económicas, han sido negadas por Colpensiones.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La apoderada judicial de la parte demandante manifestó su inconformidad frente a lo resuelto en la primera instancia, y sustentó su alzada en los siguientes términos.

Argumentó la apoderada judicial que tal y como lo indicó el titular del despacho, existen en este caso, dos posiciones contrapuestas de las altas cortes.

Sostuvo la apelante que, la demandante acudió a esta instancia judicial, apelando a la postura de la Corte Constitucional, en la sentencia SU del año 2018, la cual fue desarrollada, por otras sentencias de la misma Corte, como la sentencia T 401 de 2015, y otras sentencias en las cuales, la Corte Constitucional, ha indicado las razones por las cuales, si es procedente realizar el salto normativo, no al capricho o al arbitrio de la que más le convenga a la parte; sino que, en la sentencia SU, se recogió unos requisitos y más bien, limitó el derecho a acceder a ese reconocimiento; y que como lo indicó el juez de instancia, en este caso, la demandante supera ampliamente el TES del principio de la condición más beneficiosa, máxime que la actora, es sujeto de protección especial constitucional, por su avanzada edad.

Señaló que, el fallecido ostentaba una densidad alta de semanas, y que si bien, la historia laboral que se allega por Colpensiones, no se computa el tiempo en que el causante laboró en Colombia mayor, por cuanto el subsidio, ya fue devuelto, sin embargo, el causante tenía una densidad alta de semanas que permitiría garantizar la pensión de sobrevivientes que se depreca.

Indicó que, si bien el juez de instancia explicó porque se aparta del precedente de la Corte Constitucional, sin embargo, se debe atender a los pronunciamientos que en sede de unificación realiza la Corte, por cuanto la fuerza vinculante proviene del artículo 241 de la Carta Política, en virtud de la cual, la

Corte Constitucional, debe salvaguardar las normas establecidas en la constitución, que propenden por principios y derechos que están relacionados con la dignidad de las personas, el mínimo vital, la seguridad social, y en este caso, es claro, que la ausencia de reconocimiento de la pensión a la demandante, está vulnerando todos estos derechos.

Reiteró que la demandante es una persona de la tercera edad que no tiene ingresos, dependía del trabajo de su esposo, no percibe ayuda del estado, no tiene inmueble que le genere renta, y su situación particular; amerita acoger el principio de la condición más beneficiosa, establecido jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-005 de 2018, que permite la aplicación de los requisitos traídos por el Decreto 758 de 1990.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado de la parte demandante presentó alegatos de conclusión en sede de segunda instancia, pidiendo particularmente, sea revocada la sentencia de primer grado, reiterando lo expuesto en la demanda, y en los alegatos del recurso de apelación.

Expresó la apoderada que, las razones que tuvo el A-quo en primera instancia para absolver a la demandada del reconocimiento de la pensión de sobreviviente que se depreca, no fueron otros que indicar que, no se acoge a los postulados esbozados por la Corte Constitucional, en virtud de los cuales es dable acceder a la prestación pensional, aun cuando habiendo fallecido el afiliado, en vigencia de la Ley 793 de 2003, no cumpla con las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento.

Aseguró además que la Corte Constitucional, ya puso punto final en este tema y determinó, que sí se podía aplicar el Decreto 758 de 1.990, así la muerte del causante hubiera ocurrido en vigencia de la Ley 797 del 2.003, siempre y cuando el afiliado fallecido hubiera cotizado la densidad de semanas exigidas en esa norma durante su vigencia, como ocurre en este caso, concluyendo que la demandante, le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge.

En último lugar, imploró que se dé prelación a la interpretación más favorable a la demandante, quien es sujetos de especial protección, y, que, en consecuencia, se revoque íntegramente la sentencia apelada para en su lugar, ordenar el pago de la pensión de sobreviviente.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de sobrevivientes, causación, aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de esta Sala en la segunda instancia, los problemas jurídicos estriban en dilucidar, **I)** si el afiliado fallecido MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. **II)** y si la demandante MARÍA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, logró acreditar los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la prestación económica que por esta acción judicial reclama, **III)** y solo en caso afirmativo, pasará la sala a establecer la fecha de disfrute pensional, el retroactivo adeudado, la procedencia de los intereses moratorios y/o la indexación de las condenas.

Para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, atendiendo la fecha del fallecimiento del afiliado.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los siguientes hechos:


- i. Que MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, nació el 18 de enero de 1943, y MARÍA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, nació el 26 de julio de 1949, según se corrobora en las cédulas de ciudadanía, anexas al expediente. - PDF 4 folio 3 y 4.
- ii. La muerte del afiliado MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, insuceso acaecido el 01 de enero de 2018. - PDF 04 folio 6.
- iii. El vínculo matrimonial entre el causante y la demandante, que data del 08 de noviembre de 1970, hecho que se prueba con el registro civil de matrimonio visible en el PDF 04 folios 5.
- iv. Que, en vigencia del vínculo matrimonial, la pareja procreó cinco hijos de nombres: SANDRA MANUELA, CARLOS ALBERTO, MAURICIO ANTONIO, LUIS FERNANDO y DIANA MERCEDES ARANGO VALENCIA, todos ellos, a la fecha de presentación de la demanda mayores de edad, según los registros de nacimiento anexos. - PDF 04 folio 8.
- v. En el **trámite administrativo** adelantado por COLPENSIONES, se constata las siguientes actuaciones:
 - a) Que mediante resolución GNR 38904 del 16 de marzo de 2013, se negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor del señor MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO.
 - b) Que a través de la resolución GNR 211139 del 28 de septiembre de 2017, se reconoció indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor del MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, así: *“PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de una Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez por una sola vez, a favor del señor ARANGO HENAO MANUEL ANTONIO, ya identificado, en cuantía de **\$5,184,327.00 CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: El presente pago único será ingresado en la nómina del periodo 201710 que se paga en el periodo 201711 en la central de pagos del banco BANCOLOMBIA C. P. de MEDELLIN-CARABOBO-CL 50 N° 51”*
 - c) Que por medio de la resolución SUB 232151 del 03 de septiembre de 2018, se negó la pensión de sobrevivientes a la demandante MARÍA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, por cuanto el afiliado no dejó causado el derecho.

- d) Que mediante la Resolución SUB 327872 del 29 de noviembre de 2019, Colpensiones, negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, solicitada por MARÍA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, aduciendo que, **en vida el causante había reclamado la indemnización sustitutiva de vejez** y que a pesar de que no la había cobrado, la entidad no podía reconocer la prestación, a menos que se radicara el trámite denominado **PAGO A HEREDEROS**.
- PDF 04 folio 22.

Ahora, procederá la Sala a analizar el primer problema jurídico planteado, esto es, si el afiliado MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, dejó causado o no el derecho pensional en favor de sus eventuales beneficiarios, al respecto debe tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 2° del art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la ley 797 de 2003, que era la normatividad vigente al momento del fallecimiento del afiliado, veamos:

*“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento...**”*

Teniendo en cuenta la densidad mínima de cotizaciones exigida en el citado precepto legal, esta Sala procedió a revisar la HISTORIA LABORAL del afiliado de fecha más reciente, encontrando que el señor MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, tenía en su haber 0 semanas cotizadas entre el 01 de enero de 2015 y el 01 de enero de 2018, esto es, en los 3 años anteriores a su deceso, teniendo en cuenta que su fallecimiento se produjo el **01 de enero de 2018**, pues el afiliado acredita un total de **475,43 semanas** cotizadas entre el 17 de febrero de 1969 y hasta el **31 de marzo de 2008**. (Si bien se verifican en el expediente dos historias laborales, una que da cuenta de un total 672 semanas de cotización y otra que refleja 475 semanas, esta última es de fecha de expedición más reciente, pues data del 18 de noviembre de 2020 y en la misma se hace el descuento del periodo de cotización en el Régimen Subsidiado- o programa de Colombia Mayor – causado de septiembre de 2002 a noviembre de 2007)

		COLPENSIONES Nit 900.336.004-7						
		REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES						
		PERIODO DE INFORME: Enero 1967 noviembre/2020						
		ACTUALIZADO A: 18 noviembre 2020						
C	3364718	MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO						
[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
890981732	MUNICIPIO DE AMAGA	01/04/2002	30/04/2002	\$417.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890981732	MUNICIPIO DE AMAGA	01/05/2002	31/05/2002	\$375.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890981732	MUNICIPIO DE AMAGA	01/06/2002	30/06/2002	\$374.000	4,29	0,00	0,00	4,29
3364718	MANUEL ANTONIO ARANG	01/09/2002	31/10/2002	\$309.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3364718	MANUEL ANTONIO ARANG	01/07/2005	31/01/2006	\$381.500	0,00	0,00	0,00	0,00
3364718	MANUEL ANTONIO ARANG	01/02/2006	31/01/2007	\$408.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3364718	MANUEL ANTONIO ARANG	01/02/2007	31/01/2008	\$433.700	0,00	0,00	0,00	0,00
3364718	MANUEL ANTONIO ARANG	01/02/2008	31/03/2008	\$461.500	0,00	0,00	0,00	0,00
[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:								475,43

En ese orden de ideas, podría decirse que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del art. 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y por ello se pasará a estudiar, si este derecho se causó en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa que se solicita desde el escrito de demanda y se reitera en el recurso de alzada.

El principio de la condición más beneficiosa

Frente al tema, debe recordarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido el criterio de aplicación del principio de condición más beneficiosa, explicando que, al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal, es decir, que no es dable emplearla con un carácter indefinido.

Ha explicado la Corte que, en los casos en que la contingencia (en este caso la muerte) acontece en vigencia de la Ley 797 de 2003 y se pretende la aplicación de dicho principio no resulta admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pasado en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Esta tesis ha venido sosteniéndose, refrendándose y reiterándose por la Sala Laboral de la Corte en las sentencias rad. 32.642 del 9 de diciembre de 2008, SL7275-2015, SL7205-2015, SL6362-2015 y la SL4650-2017 – con radicación N° 45.262 del 25 de enero de 2017.

En esta última providencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejó en claro que solo era posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima, para garantizar y proteger, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. Estimó la Corte que no podía pasarse por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

En síntesis, de acuerdo con el criterio jurisprudencial abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no resulta procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa para aplicar una norma distinta a la inmediatamente anterior, dado que la causante falleció en fecha posterior al 29 de enero de 2006.

Con base en lo anterior, pasa esta sala a analizar si en este caso en concreto, y conforme a la tesis de la jurisprudencia constitucional, se cumplen o no con las circunstancias para dar el salto normativo y aplicar al sub judice el Decreto 758 de 1990, que es el argumento en el cual se erige la apelación formulada por la apoderada judicial de la parte demandante.

Debe decirse en principio que, si bien el órgano de cierre en la especialidad laboral es la Corte Suprema de Justicia, esta Sala de Tribunal no desconoce la tesis que de manera simultánea, ha venido sosteniendo la CORTE CONSTITUCIONAL frente al principio de la condición más beneficiosa, en

innumerables sentencias, donde ha expresado su criterio frente al tema, sosteniendo que, no solo la norma pensional vigente (Ley 797 de 2003) o la inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino incluso la antecedente a esta última (Decreto 758 de 1990) puede aplicarse a una solicitud de pensión de sobrevivientes, en la medida en que la persona haya cumplido con la densidad de semanas de cotización previstas en este último, antes de expirar su periodo de vigencia. (Ver entre otras las sentencias T-401 de 2015, T-464 de 2016, T-084 de 2017, T-235 de 2017, T-294 de 2017 y T-378 de 2017, criterio jurisprudencial del que solicita su aplicación la parte recurrente, toda vez que el afiliado fallecido registra en su historia laboral con más de 300 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994 **(354.85, semanas cotizadas)**, satisfaciendo así la densidad mínima de cotizaciones que otrora exigía los arts. 6° y 25 del acuerdo 049 de 1990.

7170100888	RESTREPO JAIME	17/02/1969	01/05/1969	\$	\$450	10,57	0,00	0,00	10,57
7014000330	CALDERON Y SALAZAR R	20/08/1974	24/10/1974	\$	\$930	9,43	0,00	0,00	9,43
7014000266	RIVERA CONCHA LTDA	13/12/1974	19/06/1975	\$	\$1.290	27,00	0,00	0,00	27,00
7014000345	GUTIERREZ ASOCIADOS	24/06/1975	21/07/1975	\$	\$1.290	4,00	0,00	0,00	4,00
7014000382	BANCO CENTRAL HIPOTE	31/07/1975	28/04/1976	\$	\$1.770	39,00	0,00	0,00	39,00
7014000123	SIGMA LTDA CONSTRUCC	07/05/1976	29/08/1976	\$	\$2.430	16,43	0,00	0,00	16,43
7014000455	ESTRADA M ALVARO Y O	13/09/1976	31/10/1976	\$	\$3.300	7,00	0,00	0,00	7,00
7018200372	PROP HORIZ TRIANGULO	10/12/1976	31/03/1977	\$	\$1.770	16,00	0,00	0,00	16,00
7014000393	FONDO ROT VALORIZACI	21/06/1977	04/10/1977	\$	\$4.410	15,14	0,00	0,00	15,14
7014000463	PROMOTORA HABITACION	22/12/1977	02/01/1978	\$	\$4.410	1,71	0,00	0,00	1,71
7014000136	SAFFON BUITRAGO AGUS	10/01/1978	07/04/1978	\$	\$4.410	12,57	0,00	0,00	12,57
2018201704	CARBONES SAN FERNAND	18/05/1983	27/10/1983	\$	\$9.480	23,29	0,00	0,00	23,29
2018201704	CARBONES SAN FERNAND	20/02/1984	08/05/1984	\$	\$11.850	11,29	0,00	0,00	11,29
2019300054	CARBONES SAN FERNAND	04/05/1984	01/04/1985	\$	\$14.610	47,57	0,00	0,71	46,86
2171100018	CARBONES SAN FERNAND	01/04/1985	01/04/1986	\$	\$17.790	52,29	0,00	0,14	52,14
2170108807	HACIENDA ZANZIBAR	04/09/1987	18/02/1988	\$	\$30.150	24,00	0,00	0,00	24,00
2171100011	CARBONIA LTDA MIN LA	18/12/1987	07/01/1988	\$	\$30.150	3,00	0,00	3,00	0,00
2171100043	HUMBERTO DE JESUS AR	05/08/1988	22/11/1988	\$	\$30.150	15,71	0,00	0,00	15,71
2171100029	ORLANDO CANO SANCHEZ	05/01/1989	19/01/1989	\$	\$39.310	2,14	0,00	0,00	2,14
2171100033	APONTE CASTILLO ISRA	06/02/1990	01/06/1990	\$	\$47.370	16,57	0,00	0,00	16,57
2171100051	LIBARDO DE JS ROMAN	02/04/1991	29/04/1991	\$	\$54.630	4,00	0,00	0,00	4,00

No obstante, mediante la sentencia **SU-005/18**, la Corte Constitucional realizó un ajuste jurisprudencial a la interpretación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, introduciendo un **TEST DE PROCEDENCIA** que permite valorar las distintas circunstancias que inciden en la eficacia del mecanismo judicial principal e idóneo para la garantía de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por lo que se establecieron CINCO (5) CONDICIONES para poder superar el test de procedencia, a saber:

Primera condición	Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
Cuarta condición	Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.
Quinta condición	Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Y por ello pasa la Sala a determinar, si la demandante logra satisfacer tales exigencias.

PRIMERA CONDICIÓN: Para acreditar esta condición se requiere que el demandante pertenezca a un grupo de especial protección constitucional o se encuentre en uno o varios supuestos de riesgo. En el caso de marras, se acreditó que la demandante, pertenece a un grupo de especial protección constitucional, por cuanto tiene la condición de adulta mayor¹, al contar en la actualidad con **73 años de edad**, pues nació el 26 de julio del año 1949, de acuerdo a la cédula de ciudadanía que milita en el PDF 04 folio 3 obrante en el expediente. Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, se corrobora que ésta, igualmente se encuentra inmersa, en uno de los supuestos de riesgo que describe la Corte Constitucional, como lo es, el analfabetismo, pues según su declaración, estudió hasta tercero.

¹Sentencia T 296/2016: “Este Tribunal ha señalado que los **adultos mayores son sujetos de especial protección** y en razón de su situación de indefensión el Estado es el encargado de proteger y garantizar su derecho a la salud de manera integral. Por consiguiente, el derecho aducido por el demandante es de raigambre fundamental”

Respecto a la **SEGUNDA y TERCERA CONDICIÓN**, también puede inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas de la demandante esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. Esta sala constata que la demandante dependía económicamente de su esposo, y por ende, dicha prestación sustituiría el ingreso que aportaba el causante a la beneficiaria, resaltándose en este punto que, la demandante al rendir interrogatorio de parte, manifestó de manera clara e inequívoca, que siempre se ha desempeñado como ama de casa, y que actualmente recibe la “ración” de sus hijos; declaración que se coteja con el dicho de los testigos traídos a instancia de la parte demandante, WILSON RAÚL CIFUENTES CHICA y OMAR DE JESÚS GRANADOS CARDONA, quienes aseguraron al unísono que, el causante era quien proveía los gastos del hogar, en labores como vigilante, informales y de minería; y que, actualmente la demandante, percibe la ayuda de sus hijos.

En consideración a lo expuesto, para este colegiado de las pruebas recaudadas en el expediente se colige que, el reconocimiento económico solicitado en la demanda, se erige en la satisfacción de las necesidades básicas de la demandante, esto es, su mínimo vital, por lo que, se concluye que la accionante dependía económicamente del causante.

En relación con la **CUARTA CONDICIÓN**, para justificar esta condición, se indicó en el hecho octavo de la demanda, que el causante no pudo completar las semanas de cotización necesarias, “***debido a que no lograba acceder a un empleo formal por su avanzada edad, y al cumplir los 65 años de edad, fue retirado del Programa de Colombia Mayor***”. Para lo anterior, recuérdese que el demandante nació el 18 de enero de 1943, y que, éste dejó de cotizar al sistema general de pensiones, desde el 31 de marzo del año 2008, lo que quiere decir, que efectivamente para dicha época, esto es, para el año 2008, el causante tenía **65 años de edad**.

Ahora recuérdese que a la luz del 12 de la ley 797 de 2003, que era la normatividad vigente al momento del fallecimiento del afiliado, se requería completar ***cincuenta semanas dentro de los tres últimos años***

inmediatamente anteriores al fallecimiento. Así las cosas, para esta temporalidad (año 2015), que es la que exige la ley, para el cumplimiento de las semanas de cotización, el afiliado causante tenía **72 años de edad**.

A lo anterior se agrega que, el causante desde septiembre de 2002 a noviembre de 2007, hizo aportes al sistema de seguridad social, a través del Programa de Colombia Mayor, de lo cual se deja constancia en la historia laboral indicándose que: “**registra pagos con edad superior a los 65 años**”

El Programa de Protección social al Adulto Mayor, busca aumentar la protección a los asuntos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en pobreza extrema. Según el artículo 24 del decreto 3771 de 2007², el afiliado perderá la condición de beneficiario del subsidio al aporte en pensión en los siguientes eventos: b) Cuando cese la obligación de cotizar en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 **o cuando cumplan 65 años de edad**, de conformidad con lo señalado en el artículo 29 de la Ley 100 de 199.

En gracia de discusión, de tomarse una u otra fecha, para la sala la avanzada edad del causante, justifica las circunstancias en las cuales, no le fue posible cotizar las semanas necesarias para causar el derecho a la pensión, pues a todas luces, se constata que éste estaba al margen del mercado laboral, y este colegiado, no desconoce los constantes inconvenientes que afrontar el adulto mayor, cuyas condiciones físicas, les impiden trabajar, o en otros escenarios, la sociedad los margina para el desempeño de labores, lo cual trae consigo que éstos queden inhabilitados para poder proveerse sus necesidades.

En lo concerniente a la **QUINTA CONDICIÓN**, se pudo establecer que la accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ya que el fallecimiento del causante ocurrió el **1 de enero de 2018** y la demandante presentó reclamación de pensión de sobreviviente el 16 de julio de 2018, petición que fue negada por Colpensiones, mediante resolución SUB 232151 del 03 de septiembre de 2018, y posteriormente, el 16 de octubre de

² Por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional.

2019, la actora presentó reclamación de indemnización sustitutiva, empero, la misma también fue negada por Colpensiones, a través de la resolución SUB 327872 del 29 de noviembre de 2019.

Corolario de lo anterior, y teniendo de presente que el afiliado MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, tiene en su haber un total de 354,85 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994, es claro que logró causar el derecho pensional a favor de sus beneficiarios, y particularmente, la demandante, supera el TES dispuesto por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-005 de 2018, que habilita acoger el principio de la condición más beneficiosa, establecido jurisprudencialmente y consecuentemente, permite la aplicación de los requisitos traídos por el Decreto 758 de 1990, motivos por los cuales, se revocará la sentencia de primer grado, y se accederá al derecho pensional en favor de la demandante.

Prescripción, disfrute y retroactivo pensional.

Estima la Sala que el derecho pensional es imprescriptible en sí mismo considerado, conforme las voces de los arts. 48 y 53 de la Constitución Política, no obstante, debe analizarse, si las mesadas pensionales se vieron afectadas por el fenómeno de la prescripción, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Frente a la causación, se encuentra que la misma debe ser reconocida a partir del **1 de enero de 2018**- fecha del deceso del causante-, no obstante, en aras de determinar las mesadas que se encuentran prescritas, se advierte, que la demandante presentó la reclamación administrativa de pensión de sobrevivientes ante Colpensiones, el día 16 de julio de 2018, frente a la cual, la entidad dio respuesta a través de la resolución SUB 232151 del 03 de septiembre de 2018, la cual fue notificada a la parte el **25 de septiembre de 2018**. (véase expediente administrativo) y la demanda fue presentada el **11 de enero del año 2022**. Pese a que la demandante, realizó una nueva reclamación económica a Colpensiones, relativa a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, la misma no tiene la entidad de interrumpir el término prescriptivo, sino la primera reclamación, configurándose en este sentido, la prescripción de

las mesadas pensionales, **tres años hacia atrás** de la presentación de la demanda, esto es, se encuentran prescritas las mesadas anteriores **al 10 de enero de 2019**.

El retroactivo pensional se establece, sobre el valor del salario mínimo legal mensual vigente, que corresponde al salario cotizado en promedio por el causante, por lo que la condena, será liquidada desde el **11 de enero de 2019 al 30 abril de 2023**.

El retroactivo pensional causado incluida las mesadas adicionales, es el siguiente:

AÑO	SMLMV	MENSUALIDADES	VALOR
2019	\$828,116	12,20	\$10.103.015
2020	\$877,803	13	\$11.411.439
2021	\$908,526	13	\$11.810.838
2022	\$1.000.000	13	\$13.000.000
2023	\$1.160.000	4	\$4.640.000

Total: \$50.965.292

De la suma de **\$50.965.292**, se autoriza la deducción del aporte obligatorio en salud, conforme lo señalado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

A partir del 1° de mayo de 2023, COLPENSIONES deberá continuar pagando a la demandante, una mesada pensional de un salario mínimo legal mensual vigente, sobre 13 mesadas anuales por cuanto causó el derecho con posterioridad al 31 de julio de 2011, en vigencia del Acto legislativo 01 de 2005, sin perjuicio de los incrementos que decreta el gobierno nacional.

Intereses moratorios o indexación de las condenas.

Finamente y en relación con la pretensión de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, estima esta corporación que los mismos no están llamados a prosperar en el sub lite, dado que el motivo por el cual la entidad accionada se opone al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, no fue otro distinto que la no acreditación del requisito legal de semanas cotizadas por el causante, a la luz de lo dispuesto en el art. 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y es solo mediante este proceso judicial, que

se logró la demostración del derecho pensional acudiendo a la valoración probatoria y la hermenéutica jurisprudencial (sentencia **SU-005/18**), facultad interpretativa que solamente le está conferida al administrador de justicia para la resolución de los conflictos que tiene bajo su competencia, y al ser ello así, la pasiva tenía elementos de ley suficientes para negar el derecho pensional, razones por las que la Sala considera que, en el caso planteado, no hay lugar a condena a intereses moratorios, sin embargo accederá a la INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS como mecanismo para, además de mantener el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales, subsanar el retardo de la entidad demandada en pagar la pensión de sobrevivientes, indexación que debe ser calculada por COLPENSIONES a partir del **11 de enero de 2019**, mes a mes y sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado hasta el momento en que se produzca su pago efectivo, Para liquidar la indexación la pasiva tendrá en cuenta la siguiente formula:

ÍNDICE FINAL

ÍNDICE INICIAL x VALOR A INDEXAR – VALOR A INDEXAR

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la prosperidad del recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la demandante, las costas procesales en ambas instancias estarán a cargo de COLPENSIONES y en favor de la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del art. 365 del Código General del Proceso. En esta instancia se fijan como agencias en derecho al equivalente a un (1) SMLMV para el año 2023, las agencias en derecho en primera instancia, deberán ser liquidadas por el juzgado de origen, en atención a lo aquí expuesto.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR íntegramente la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocida, para en su lugar, DECLARAR que la señora MARÍA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, le asiste derecho a una pensión sobrevivientes a raíz de la muerte de su cónyuge MANUEL ANTONIO ARANGO HENAO, en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, y con remisión al Decreto 758 de 1990, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora MARÍA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, una pensión de sobrevivientes, cuyo retroactivo pensional calculado entre el **11 de enero de 2019 al 30 abril de 2023**, en razón de 13 mesadas anuales asciende a la suma de **\$50.965.292**, mesadas que deberán ser indexadas por COLPENSIONES mes a mes a partir del **11 de enero de 2019** y hasta el momento en que se efectuó el pago.

Y a partir del 1° de mayo de 2023, COLPENSIONES deberá continuar pagando a la actora, una mesada pensional equivalente a un (1) SMLMV para el año 2023, y sobre 13 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos que decreta el gobierno nacional.

TERCERO: Se autoriza a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional adeudado a la señora MARÍA CENAYDA VALENCIA DE ARANGO, el porcentaje destinado al aporte obligatorio al subsistema de salud, según lo expuesto en precedencia.

CUARTO: COSTAS en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante, en esta instancia las agencias en derecho se fijan en el equivalente a un (1) SMLMV para el año 2023, las agencias en derecho de primera instancia, deberán ser liquidadas por el juzgado de origen.

QUINTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

SEXTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA